

Cooperativas de minería de pequeña escala en Bolivia: De salvavidas de los pobres a maquinaria de manipulación política

Small scale mining cooperatives in Bolivia: From lifeguard of the poor to machinery of political manipulation

Felix Carrillo, Ton Salman y Carola Soruco

Félix Carillo es ingeniero metalúrgico y experto en minería aurífera de pequeña escala en Bolivia.
felixcc@medmin.org

Ton Salman es profesor asociado en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la VUA
Ámsterdam
a.j.salman@vu.nl

Carola Soruco es una antropóloga con experiencia en etnografía en campos mineros.
csc_soruco@hotmail.com

Los tres son investigadores en el proyecto de investigación GOMIAM sobre minería aurífera de pequeña escala en la región amazónica, en cuyo marco se llevó a cabo esta investigación.

Fecha de recepción: 19 de marzo del 2013
Fecha de aceptación: 27 de septiembre de 2013

Resumen

En este artículo se argumenta que las relaciones entre movimientos u organizaciones sociales y Estado se desarrollan no únicamente en base a cálculos de intereses y defensa de metas objetivas en negociaciones políticas, sino también en el marco de situaciones particulares, de culturas e historias específicas. Nuestra investigación sobre el desarrollo del relacionamiento entre las cooperativas mineras y su organización nacional y el Estado boliviano demuestra que es de crucial importancia tomar en cuenta los aspectos históricos, de memoria colectiva, regionales y otros dentro las organizaciones. Las tradiciones, memorias y destrezas incorporadas en las organizaciones mineras así como en el ámbito político influenciarán la manera en que las diferentes partes involucradas

se relacionan unas a otras, diseñan sus estrategias y se adaptan a circunstancias cambiantes. El tema se ilustra primero a través de un retrato histórico y contemporáneo de la minería en Bolivia enfocado en el sector de la pequeña minería aurífera, seguido de un esbozo de la posición que ocupa la minería cooperativizada en el país y las estrategias y autoestima que hoy en día despliega. A continuación, se aborda la situación de nuestro estudio de caso, la cooperativa ASOBAL. En el esbozo nacional, así como en nuestro estudio de caso, conectamos las posiciones y estrategias con los temas de identidad, memoria y lugar.

Palabras clave: organizaciones y movimientos sociales, pequeña minería aurífera, cooperativas, estrategias de promoción de intereses sectoriales, Bolivia.

Abstract

This article argues that relations between social movements and organizations and the State are not only developed based on defended objectives and interests in political negotiations, but are also developed within particular situations, of specific cultures and histories. Our investigation about the relationship between mining cooperatives, their national organization, and the Bolivian State demonstrates the crucial importance of considering historical aspects, of collective memory, some regional and others within the organizations themselves. The traditions, memories, and abilities incorporated in the mining organizations and in the political realm will influence the way in which different parts relate to one another, design their strategies, and adapt to changing circumstances. This topic is illustrated firstly through a historical and contemporary account of mining in Bolivia focused in the sector of small scale mining. This is followed by outlining the position that cooperative mining occupies in the country and the strategies and self esteem that they display. Next, our case study is addressed: the ASOBAL cooperative. In the national outline, like in our case study, we connect the positions and strategies with themes of identity, memory, and place.

Key words: social movements and organizations, small scale mining, cooperatives, strategies promoting corporate interests, Bolivia.

Introducción

El proyecto de investigación GOMIAM (www.gomiam.org) se dedica a un análisis comparativo de problemas ambientales y conflictos sociopolíticos en la minería aurífera de pequeña escala (MAPE, o SSGM por sus siglas en inglés) de la región amazónica de Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Surinam. Uno de los asuntos principales del campo de estudio resultó ser las formas, características e historias organizativas de los mineros, por cuanto estas influyen fuertemente en la naturaleza y desarrollo de los conflictos tanto con poblaciones locales como entidades estatales, y asimismo habilitan o limitan las oportunidades para introducir técnicas nuevas y más amigables con el medio ambiente. Obviamente, también los rasgos organizativos y la “personalidad” de los aparatos estatales tienen un impacto considerable sobre esos conflictos y el éxito de las actividades de monitoreo o las intervenciones legales. En Bolivia, entre 2010 y 2012, una aguerrida federación de cooperativas mineras (FENCOMIN) ejerció una gran presión sobre el poder ejecutivo para el diseño de un proyecto de ley minera que favorezca su forma de minería. Pero simultáneamente, varias cooperativas mineras individuales (y miembros de FENCOMIN) aparentemente no comparten esta “marcialidad” y son mucho más reticentes a cumplir las nuevas regulaciones mineras a implementarse en las áreas donde trabajan. ¿Cómo se explican esas discrepancias? Nuestro argumento es que las historias y factores circunstanciales pueden ayudar a dar cuenta de tales diferencias entre la dinámica nacional y local.

La investigación sobre los movimientos y organizaciones sociales y la acción colectiva ha puesto desde ya varias décadas más atención a las dimensiones históricas y culturales de estos fenómenos. El riesgo de considerar a actores como los movimientos sociales como “sujetos pre-existentes” (Rubin, 2004: 108) o simplemente como “actores racionales” (Rubin, 2004: 137) es que se los reduce a meros aparatos preprogramados. En realidad, “[l]as lecturas y relecturas del pasado y los significados simbólicos ocurren en el ámbito de las luchas políticas vigentes y los diálogos constantes entre las narrativas políticas alternativas y las oficiales o dominantes” (Damonte 2008: 298-299).

Este artículo pretende contribuir a la comprensión de la manera en que tales dimensiones se traducen, de modo dinámico, en actitudes y conciencia de sí mismos de los miembros de las organizaciones o los movimientos, por un lado, y de los funcionarios estatales por el otro, quienes resultarán, en este caso, ellos mismos inhibidos o habilitados por una historia de pertenencia al movimiento social.

En las últimas décadas, el dramático crecimiento de la minería aurífera de pequeña escala (MAPE) ha resultado en crecientes problemas ambientales y conflictos sociopolíticos en la Amazonía. [1] Los efectos contaminantes de la MAPE amenazan con frecuencia el sustento de pueblos indígenas o campesinos en las proximidades de las operaciones mineras. Abundan los conflictos sobre tierras entre mineros y grandes concesionarios (empresarios privados), campesinos, madereros u otras actividades de extracción forestal. Surgen tensiones fronterizas cuando los mineros de un país invaden otro, o pasan oro de contrabando entre los países. Las actividades de la MAPE son a menudo con poca tecnología y, aunque son de alcance geográfico limitado, son igualmente muy dañinas debido a la expansión descontrolada de sitios de operación (si bien relativamente pequeños) y debido al uso frecuentemente descuidado de mercurio y otros químicos, y poca conciencia de los efectos de los desechos inorgánicos. Asimismo, debido a la ausencia o ineficacia de controles por los funcionarios estatales, la resolución de conflictos y la organización en los sitios mineros es a menudo autónoma, y las condiciones laborales sub-humanas. Con la reciente inestabilidad económica global que hizo subir el precio del oro y, consecuentemente, con la actividad volviéndose más atractiva e incluso las técnicas simples más mecanizadas, la escala de los problemas está aumentando. Por cuanto pocos gobiernos nacionales saben cómo responder a estos desarrollos, urge responder con políticas basadas en un conocimiento preciso de la realidad.

En cuanto a organización de mineros, y más allá, Bolivia es un caso especial: el nivel de "organización" de la sociedad civil es notoriamente alto. Lo mismo es cierto del nivel de experiencia y destreza en relación con la creación y administración de una organización. En el sector minero, particularmente, el cooperativismo es dominante. Este cooperativismo, adecuando constantemente sus estrategias, interactúa con las

autoridades. Por el otro lado, los responsables de políticas y las entidades que las implementan, como las instituciones estatales o las autoridades regionales y locales, también adaptan sus procedimientos y acciones para "encajar" con las características de las organizaciones a las que se supone tienen que gobernar, regular, controlar, monitorear o inspeccionar. El propio diseño de (nuevas) políticas reflejará de inicio un conocimiento de las características organizativas de "esos ahí afuera" que se necesita respondan a la implementación de políticas.

La idea de una mutua adaptación merece un mínimo de elaboración. Las características de los procesos de adaptación o ajuste dependerán de las dimensiones culturales e históricas antes mencionadas, pero también de la percepción, en ambos lados, de la fuerza de los dos actores principales, como de otros actores, grupos o partes interesadas. Como elaboraremos más adelante, la situación boliviana no permite una solución basada en la imposición de su poder total de una de las contrapartes. Sin embargo, tampoco podemos hablar de un contexto de poder simétrico; como ilustraremos, la iniciativa y presión proviene de los organismos estatales. Pero ellos no son suficientemente poderosos como para controlar todo. Más bien, el proceso de adaptación parece uno basado en el reconocimiento, si bien elemental, de las pretensiones legítimas de los otros, lo que resulta en una mezcla de procesos estratégicos autónomos e inducidos (Burgelman, 1991). Lo que ocurrirá en este caso es una adaptación tanto reticente como, al mismo tiempo, basada en un preentendimiento mutuo de las reglas del juego. En tanto "organizaciones", y por tanto internamente estructuradas y estratificadas, las cooperativas mineras así como los organismos estatales están bien preparados para adaptaciones flexibles, en el escenario y fuera de él, y asumidas de modo co-evolutivo (Lewin y Volberda 1999), construidas en base a observaciones cautelosas de las acciones de la otra parte (Williamson, 1995: 228). Una apropiación de vocabularios e ideas de la otra parte, y la anticipación de sus acciones y estrategias, con toda probabilidad formará parte de tales adaptaciones.

Ilustremos esto mediante el caso de los pequeños mineros del oro, organizados en cooperativas, y a nivel nacional en FENCOMIN. Haremos primero un breve esbozo de las tradiciones organizativas en Bolivia. A continuación, abordaremos la actual

situación política y ubicaremos las cooperativas mineras en el actual campo de juego sociopolítico. Posteriormente, intentaremos analizar las estrategias actualmente empleadas por ellas, *vis-á-vis* los objetivos, leyes y actitudes del gobierno central. Nos dirigiremos luego a la región del estudio de caso: el Río Madre de Dios al norte de Bolivia y la cooperativa que trabaja en el lugar, ASOBAL.

Herencias organizativas en Bolivia

Bolivia tiene mucha tradición cuando se trata de "organizarse". Aparte de la fuerte tradición sindicalista, también los grupos de comerciantes minoristas, de padres de una escuela determinada, de estudiantes de una facultad, de transportistas internacionales e inter-departamentales de mercaderías, del sector de transporte público en las ciudades, de artesanos, de coccaleros, o grupos de campesinos sin tierra, o habitantes de un barrio, y muchos otros, se reúnen y organizan.

Este fenómeno de la presencia de una densa aglutinación de organizaciones de intereses sectoriales, según el PNUD (2007), es algo favorable y al mismo tiempo un problema para las autoridades; es un problema porque estas organizaciones, a menudo de un considerable poder de movilización, no aceptarán de buen grado nuevas regulaciones, impuestos u otras medidas estatales. Así que las autoridades se enfrentan a menudo con adversarios fuertes. Pero ello también ayuda a la gobernabilidad. Estas organizaciones asumirán con frecuencia la regulación de actividades, el mantenimiento del orden y, tal vez más importante, actuarán como voceros o representantes de sectores específicos o un grupo de actores. De este modo, las autoridades tienen a un interlocutor, lo que facilita las negociaciones, y en algunos casos éste asume la implementación o el control sobre la implementación de nuevas medidas de regulación específica.

Otro antecedente importante para nuestro argumento se refiere al carácter especial de las "cooperativas mineras", una especie de organización muy peculiar e importante en Bolivia. Su surgimiento adquirió gran importancia en la década de 1980. En ese tiempo, los precios de los minerales eran bajos y el Estado adoptó un paquete de políticas económicas neoliberales. Como resultado de ello, las empresas mineras estatales

(agrupadas en la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL) fueron desmanteladas, y decenas de miles de mineros asalariados fueron despedidos. Como una especie de “premio consuelo”, o salvavidas, a algunos grupos (cooperativas) de mineros desocupados pero organizados se les otorgó concesiones (a precios de patentes relativamente módicos) para que sigan explotando la mina, particularmente en vetas antiguas o en lugares conocidos por contener minerales. Muchos mineros invirtieron algo de dinero para volverse “socios” de una “cooperativa”, que podía a continuación obtener la concesión y empezar a trabajar colectivamente (Michard, 2008). Una cooperativa minera se convierte así en una empresa de propiedad colectiva, de control interno democrático, y regida según la Ley General de Sociedades Cooperativas (Decreto Ley N° 5035 de septiembre 13, 1958) (Carrillo, 2012: 2). En términos ideales, se basa en los valores de autonomía, igualdad, responsabilidad, democracia, equidad, solidaridad y responsabilidad social.

Al comienzo, se trataba de una alternativa miserable para la mayoría de los mineros. Muchos sufrían de pobreza, solían a privilegiar la ganancia de corto plazo en vez de las inversiones de largo plazo o la seguridad de los trabajadores y muchos eran víctimas de accidentes o morían prematuramente por enfermedad de los pulmones u otras. Muchachos jóvenes ayudando, o tomando el lugar de sus padres en caso de la muerte de él, eran casos comunes.

Después las cosas cambiaron. En la década de 1990, los precios de los minerales subieron nuevamente, y particularmente en casos donde las cooperativas encontraban una nueva veta, se volvió alcanzable una modesta o a veces una considerable riqueza. Varios socios pudieron incluso dejar de trabajar, y más bien contratar mineros desocupados de afuera de la cooperativa para que hagan el trabajo. En años recientes, se fundaron muchas nuevas cooperativas que obtuvieron nuevas concesiones. Según una declaración del viceministro de minería cooperativizada del 15 de marzo de 2012, en los últimos dos años se han registrado 40.000 nuevos cooperativistas, a menudo para la extracción de oro, particularmente en los departamentos no tradicionalmente mineros de Pando, Beni, y Santa Cruz. [2] Sin embargo, debido al escaso control, el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales muchas veces era más bien descuidados. En

algunos casos, esto llevó a conflictos con comunidades rurales próximas que sufrieron las consecuencias de la contaminación de suelo y agua, o ellas mismas interesadas en explotar la mina (*América Economía*, 9-2-2012). De cualquier modo, la fuerza económica y política de las cooperativas se incrementó desde 1990 en adelante. Ellos, en este sentido, continuaron la destacable historia de un fuerte y combativo pasado de las organizaciones mineras en Bolivia. Sin embargo, aunque su identidad como “trabajadores” les posicionó ideológicamente como adversarios a los gobiernos de turno (que insistieron en políticas neoliberales; ver Assies y Salman, 2004), por lo demás ellos aprovecharon del *laissez faire* de estos gobiernos. Pero cuando una alternativa electoral progresista, incluso “socialista”, surgió en la década de 2000, muchas cooperativas y su federación nacional (FENCOMIN) no dudaron en prestarle su apoyo.

Un esbozo de la actual constelación política en relación con la minería

Desde el 2006, un nuevo gobierno rige el país. Es la alternativa electoral que las cooperativas apoyaron. En el discurso y programa del MAS, varios temas que afectan directamente a la minería son destacables. En primer lugar, el control estatal o, idealmente, incluso la propiedad de todos los recursos naturales estratégicos se considera primordial. En segundo lugar, el discurso celebra (inspirado por los valores indígenas) el cuidado de la naturaleza, y el respeto a la *pachamama*. En tercer lugar, el nuevo gobierno se define como “popular” y enraizado en los movimientos sociales de los bolivianos tradicionalmente pobres y excluidos (Salman, 2011; Webber, 2011). Entre los cuales podemos encontrar a las cooperativas mineras, organizadas a nivel nacional en FENCOMIN. Se cree que las cooperativas mineras auríferas representan hoy más del 40% de todas las cooperativas. Pero también la organización sindical de mineros asalariados (al comienzo principalmente contratados por empresas mineras privadas pero crecientemente también por la COMIBOL que empieza a expandirse nuevamente), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), es otra de las organizaciones que apoyan al gobierno del MAS.

Esto produce una nueva constelación en la que podemos, para simplificar las cosas, distinguir las siguientes características con respecto a las relaciones entre el Estado y los movimientos sociales, aquí en particular las de los mineros.

En primer lugar, estos acontecimientos colocan al gobierno boliviano en evidentes apuros frente al desafío de controlar y regular al sector minero, muy fuertemente dominado por el sector cooperativo. El *modus operandi* de la minería cooperativizada se ha vuelto para muchos una forma muy atractiva de hacer minería, y simultáneamente una opción de hacer minería que los cooperativistas perciben como un "derecho" completamente legal. Hoy, el sector demanda dispensaciones y privilegios que tienden a socavar la ambición del Estado por controlar el sector minero en su conjunto, y socavarían aun más su objetivo de hacer que la minería sea más amigable con el medioambiente (Radhuber, 2012: 3).

En segundo lugar, el gobierno oscila entre su impulso por nacionalizar el sector estratégico de la minería, por un lado, y su conciencia de que no tiene el poder de decidir en contra de las cooperativas ni la capacidad administrativa o técnica para manejar semejante empresa, por el otro. A lo cual debería añadirse que, debido a la necesidad de la llegada de tecnología actualizada, el gobierno no quiere ahuyentar a los inversionistas transnacionales, aunque de hecho tiende a hacerlo por las nacionalizaciones y la persistente confusión e inseguridad respecto la existencia de reglas del juego claras y sólidas (Pellegrini, 2012; Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2006; *Perspectiva Minera*, 27-4-2012; *La Prensa* 25-4-2012, *La Razón*, 10-4-2012).

Finalmente, en 2012 emergieron fuertes debates en Bolivia sobre el desarrollo y actual papel de las cooperativas. Son acusadas por expertos en minería, funcionarios estatales y ambientalistas, de funcionar cada vez más como empresas privadas, de maltratar a sus trabajadores y violar las normas y regulaciones ambientales [3] (Mogrovejo y Vanhuynegem 2012: 67) y de seguridad laboral, de aprovecharse del miedo a ser contrariadas en círculos gubernamentales, y de inhibir las intenciones nacionalizadoras al exigir un otorgamiento más fácil de concesiones mineras. [4] Muchos sospechan que

las cooperativas influyen desmedidamente en el diseño de la nueva ley de minería (en punto muerto desde hace varios años), demandando una serie de privilegios injustificables y liberación de obligaciones. En años recientes se ha visto un enorme crecimiento en el número de cooperativas, y muchas de ellas trabajan en la minería del oro. Las cooperativas dominan y controlan *de facto* la industria. [5] Según las noticias cotidianas difundidas por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), las cooperativas apenas pagan impuestos, presionan al gobierno, son a veces empresas privadas ricas y lucrativas disfrazadas, y abusan de su actual posición de poder. [6]

Análisis de las actuales estrategias organizativas

En el año 2012 el debate alcanzó alturas mayores. El 6 de septiembre un grupo de comunarios de la región, todavía en el proceso de formar una cooperativa, invadieron parte de una mina operada por *Pan American Silver Company* en San Vicente, provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí. Otro conflicto alrededor de Colquiri llevó a masivos bloqueos de carreteras y una confrontación sangrienta entre mineros asalariados y cooperativistas. Fueron solo unos episodios en una larga serie. Lo que está en juego es un mayor pedazo de la torta del total de la minería para las cooperativas. En años recientes, Bolivia ha experimentado una serie de rápidas nuevas concesiones y de toma de tierras y minas allí donde las vetas son más prometedoras, y del surgimiento de nuevas cooperativas, frecuentemente en tierras bajas (Roca, 2013, USAID, 2012).

Las cooperativas usan su enorme potencial de movilización, y el “peso” de su apoyo al gobierno. Juegan con su imagen y prestigio como generadoras de empleo en tiempos en que el empleo es un rasgo crítico de los aprietos económicos del país, y usan su presencia en círculos de gobierno e institucionales a través de antiguos “hombres fuertes” de la organización. Esto les otorga enormes ventajas para influir en las decisiones y políticas de gobierno. Sus demandas, expresadas principalmente por FENCOMIN, se enfocan en el acceso a más áreas mineras y el otorgamiento de concesiones en esos lugares, en privilegios de no pagar o contribuir un mínimo de impuestos, descartando la idea de nacionalizaciones y rechazando vehementemente cualquier sugerencia de monitoreo e inspecciones más estrictas. Cuando el Estado se

muestra reticente a conceder, amenazan con movilizaciones y el retiro de su apoyo al actual gobierno. En 2005 protestaron contra el nombramiento del ministro de minería Jorge Espinoza, en 2007 exigieron una reunión con el presidente Evo Morales para tratar la nueva política minera, en 2012, sobre la nacionalización de una mina, dijeron que iban a ir a un bloqueo de carreteras y la toma de minas, si el gobierno no cedería.

Por estas razones, el papel de FENCOMIN en la adopción de medidas *ad hoc* recientes, y en el diseño de la nueva ley de minería, atascada durante años, ha sido duramente criticado, si bien los funcionarios del MAS en los ministerios tienden a utilizar un lenguaje más suave. [7] Pero su posición es fácilmente explicable en el actual escenario. Los dirigentes están muy conscientes de su importancia e influencia, y las ven confirmadas en las reacciones dubitativas del Ministerio de Minería y Metalurgia. Aprovechan la combinación de dos procesos: en primer lugar, el proceso de larga duración que resultó en la fuerza, disciplina interna y solidez, y la capacidad de autogestión (e incluso a veces co-gobierno) de las organizaciones y movimientos sociales, en especial de minería, en Bolivia. Esto les dio las habilidades, el repertorio de acciones, la fluidez en la comunicación interna, la "naturalidad" del asedio a los gobiernos y la conducción efectiva de un conjunto amplio y geográficamente disperso de cooperativas mineras. Su posición se nutre de las memorias que atesoran acerca del poder que tenían: las organizaciones de trabajadores mineros fueron, durante décadas, un actor poderoso en la política boliviana. Los mineros recordarán esto (Damonte 2008: 282-291), y sacarán de estas remembranzas fuerza y confianza en sí mismos.

En segundo lugar, FENCOMIN saca provecho eficientemente de la actual situación política y se convierte en maquinaria para influir la política. Casi llega a chantajear y extorsionar al gobierno y Ministerio de Minería y Metalurgia. Saben que en cualquier reunión organizada por el Ministerio, ella será la parte interesada más influyente, debido a una supuesta afinidad ideológica así como al número de sus afiliados y las actuales relaciones de poder. Ni las empresas mineras privadas, ni las organizaciones de mineros asalariados, ni las ONG ambientalistas, tampoco las organizaciones campesinas u otras entidades como el Tesoro General de la Nación (TGN) que espera recaudar impuestos,

podrán doblarle el brazo a FENCOMIN. Y el gobierno no se arriesga a tener malas relaciones con FENCOMIN.

A la vez, el gobierno y el ministerio también manejan sus estrategias. Varios funcionarios vienen ellos mismos de ONG u organizaciones mineras, y conocen el paño. Juegan el juego del dividir y gobernar entre las distintas partes; enfatizarán su hermandad con las cooperativas, pero tratarán de obtener concesiones.

Además no se debiera subestimar la influencia de la tradición. Casi todos los movimientos sociales en Bolivia han enfrentado tradicionalmente al gobierno, y lo han percibido como adversario. Tales percepciones acerca de la “naturaleza” de la otra parte se han vuelto rutinarias, parte de la cultura, algo interiorizado. Eso hace que los cambios sean más difíciles, aun si discursivamente se admite la “hermandad” con el actual gobierno. Desde ambos lados, las “respuestas” a los actos del adversario no son algo mecánico, estratégicamente calculado o causal; e incluyen todo aquello cultural que se sedimenta en memorias, destreza y experticia. [8]

Parece que, particularmente las cooperativas más antiguas, tienen en FENCOMIN una dirección fuerte y aglutinadora. Sin embargo, entre las cooperativas existen considerables diferencias entre las más ricas y las más pobres, las establecidas y las nuevas, las más pequeñas y las más grandes, y las cooperativas (y sus socios) de tierras altas y tierras bajas. De qué manera esta variedad podría influir a futuro en la capacidad de FENCOMIN para mantener su posición inflexible, es algo que no está claro. Pero la forma en que podría conducir a que las cooperativas individuales adopten estrategias diferentes a las de FENCOMIN, puede ilustrarse mediante la visita a una cooperativa que trabaja en el río Madre de Dios al norte de Bolivia.

El caso de ASOBAL en Madre de Dios

Nuestro estudio de caso fue en la cooperativa clave en el río Madre de Dios. La cooperativa se llama Asociación de Balseros en Oro Aluvional Madre de Dios (ASOBAL). [9] ASOBAL reúne a más de 200 socios, todos propietarios de balsas o

pontones. El directorio básicamente define e implementa las posiciones que irá adoptando frente a los cambios de políticas a nivel nacional y regional, negocia con las autoridades y también distribuye y monitorea el cumplimiento de regulaciones en las operaciones. ASOBAL controla actualmente toda la minería de oro aluvional en el río Madre de Dios entre la frontera con Perú y la ciudad boliviana de Riberalta. Por supuesto, ASOBAL es miembro de FENCOMIN.

En el entorno directamente político de ASOBAL se encuentra, para empezar, la entidad estatal Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), creada en 2009, que incorpora la ambición de las autoridades nacionales por regular en el país el desordenado desarrollo de la minería del oro y, de manera más amplia, monitorear el desarrollo de las regiones fronterizas generalmente poco pobladas, donde hasta ahora el Estado no logró controlar lo que ocurre ni la provisión de servicios (Tejada, 2012: 71). En relación con la actividad de la minería aurífera, el lanzamiento de una serie de reglas sobre el uso de mercurio, manejo de desechos y contaminación auditiva, combustibles y otras contaminaciones, y la obligación de proporcionar a las autoridades “informes ambientales”, estaban entre los aspectos importantes. Más en general, ADEMAF debe frenar la apropiación informal de tierras, las actividades comerciales informales o ilegales (impulsadas por extranjeros), el contrabando y el traspaso ilegal de frontera. Se trata de una organización estatal bastante autónoma, con un gran mandato de controlar, imponerse, introducir servicios estatales (como asistencia en salud ambulante), patrullar y realizar detenciones (Tejada, 2012: 73). Las actividades mineras, particularmente en las regiones más alejadas, están empezando a sentir las consecuencias de su presencia. Un logro fue que los propietarios extranjeros y su presencia fue “desalentada”. Como resultado, la mayoría de los mineros en zonas fronterizas con Brasil y Perú, y particularmente en la región de Madre de Dios, son actualmente bolivianos.

Adicionalmente, está la Empresa Boliviana de Oro (EBO). Esta empresa “” fue creada en 2010 para comprar todo el oro que se encuentra en el país. Sus objetivos son: construir una adecuada reserva de oro y, simultáneamente, asegurarse que todas las actividades mineras auríferas sean registradas, gravadas y legales. EBO tiene una

oficina en Riberalta. Pero muchos observadores están de acuerdo en que el funcionamiento de EBO es aún bastante deficiente, y solo una pequeña fracción del oro recuperado está efectivamente canalizada a través de EBO. Aparte de ADEMAF y EBO, se encuentran las autoridades y funcionarios departamentales establecidos. Por lo general, estos aparatos estatales funcionan muy deficientemente, lo que quiere decir que ASOBAL enfrenta un monitoreo irregular e incierto respecto a sus obligaciones en términos de documentación, procedimientos para manejo de desechos y mercurio, certificados de venta de oro a EBO, compra de combustibles según las normas y otros requisitos. En otras palabras, no existe un patrón de intercambio o compromiso de largo plazo entre los organismos estatales y las cooperativas como ASOBAL; ambas partes se encuentran todavía, en cierta manera, en proceso de consolidación interna así como de establecer los términos de la relación. Tampoco son fuertes las memorias de previos encuentros ni los sentimientos de pertenencia al "lugar".

También hay comunidades locales de campesinos e indígenas, autoridades locales de pequeños pueblos como Sena, una especie de centro local de los movimientos mercantiles y financieros generados por la minería y, por supuesto, de proveedores de equipos y abastecimientos, entidades a cargo de parques nacionales y algunas ONG.

Apremiado por las autoridades, por ADEMAF y EBO, hoy ASOBAL construye infraestructura y asume la responsabilidad por procedimientos de manejo de desechos, e intenta responder a las nuevas regulaciones sobre contaminación de ríos, uso de mercurio, medidas de seguridad, permisos y otras similares. Pero según representantes de ASOBAL, el Estado no les ayuda mucho. Creen que los funcionarios estatales los están pintando como gente contaminadora, destructora de los ríos, para dañar su imagen. No obstante, los socios de ASOBAL, frente a las presiones estatales, replican que hacen su máximo esfuerzo para cumplir con las reglas y, por ejemplo, se limitan a trabajar con mangueras de 6 pulgadas y motores de 60 hp, para evitar dañar demasiado el lecho y las especies de río. Con frecuencia, se menciona el problema de que EBO no tiene suficiente dinero en efectivo para pagar directamente por el oro. En opinión de ASOBAL, ello ilustra la ineficiencia y disfuncionalidad del papel de los organismos

estatales. Sin embargo, estos reclamos no implican intentos por desautorizar o presionar a estos organismos. ASOBAL sí se queja, pero no desafía a las autoridades.

Es obvio que ASOBAL no es uno de los miembros altisonantes y confrontadores de FENCOMIN. Las razones para ello, una vez más, apuntan a dimensiones como la historia de la organización, la composición de sus miembros, y los rasgos culturales e identidades que, en conjunto, pueden ayudar a explicar las actitudes y estrategias de ASOBAL.

En primer lugar, en estas tierras bajas, no hay una gran tradición de confrontación y bravura minera. Además, los socios no comparten necesariamente una larga historia de luchas o sufrimientos, si bien esos conocimientos sobre la necesidad y los beneficios de una cooperativa, más las habilidades para crearla, son generalizados entre ellos. Pero no tienen un “paquete” de memorias compartidas, una identidad colectiva consolidada, o una memoria de triunfos sobre las cuales apoyarse. Segundo, frente a las entidades regionales, no tienen la misma posición que tiene FENCOMIN frente al Estado. Por eso, ASOBAL tiende a mostrar un estilo de acción más cauteloso y tentativo. Esta actitud fue reforzada por los lanzamientos, inicialmente con bombos y platillos, de ADEMAF y EBO; ASOBAL percibió que debía tratar no solo con las entidades estatales departamentales, tradicionalmente ineficientes, sino con instituciones nuevas y dinámicas ansiosas por causar una primera impresión. En tercer lugar, el directorio y los socios, más que nada, están deseosos de poder trabajar tranquilamente y sin preocupaciones. Por tanto, ellos prefieren cumplir en vez de pelear. En cuarto lugar, ASOBAL no está actualmente preocupada demasiado por nuevas concesiones o el acceso a nuevos lugares, se concentra en garantizar su situación presente en vez de intentar expandirse. También en ese sentido no había necesidad de ser demasiado asertivos. Algunos elementos de la actual estrategia y “ataques” al gobierno desplegados por FENCOMIN no son por ello su principal interés. Por último, ellos prefieren orientar su energía y esfuerzos, en la actual coyuntura, a la consolidación de su propia cooperativa, que añadir sus fuerzas a los actuales combates de FENCOMIN. Todo esto hace que ASOBAL desarrolle procesos de adaptación estratégica inducidos antes que autónomos. De cualquier modo, ellos tienen la suficiente experiencia y

cohesión organizativa como para asegurar que las autoridades no pueden imponer sus criterios unilateralmente; las autoridades funcionan según el principio co-evolutivo antes mencionado (Lewin y Volberda, 1999).

A pesar de todo esto, ASOBAL está como tal involucrada en el actual juego de poder de FENCOMIN: su interés en impuestos reducidos o liberaciones de impuestos, en la connivencia de las autoridades con el jugueteo frente a las regulaciones, y en favorecer a las cooperativas a costa de las comunidades locales, la propiedad estatal de las minas y los intereses de las empresas privadas más grandes, todo esto ellos lo comparten con FENCOMIN. Así lo declararon varios dirigentes de ASOBAL, y por eso aportan a FENCOMIN con sus contribuciones.

En el caso de ASOBAL, como en el de FENCOMIN uno puede entonces observar la continua adopción de estrategias, repertorios, consideraciones de lo que convendría hacer, y lo que podría ser contraproducente; cuáles son las capacidades que la cooperativa tiene para que la cosas salgan adelante, y cuáles son las limitaciones en términos de movilización y actuar con perspicacia en los intercambios con las autoridades, con ADEMAF y otros. Lo que informa esas decisiones son las dimensiones de identidad incipiente de ASOBAL, la falta de memorias sobre luchas colectivas y hazañas del pasado, y la comprobación de sus propias fortalezas y habilidades. Sus consideraciones difieren de las de FENCOMIN, pero demuestran el mismo tipo de características culturales y sociales de la organización que ellos conforman.

A manera de conclusión

Pudimos observar de qué manera las actitudes y estrategias de autoridades, como los ministerios, adquirieron forma incorporando el hecho de estar frente a un oponente fuerte e intrépido como FENCOMIN, ver que muchos funcionarios ministeriales también conocen los mecanismos de tal dinámica del movimiento, y de que están conscientes del hecho que no pueden permitirse tener a FENCOMIN como adversario. Adicionalmente, los ministerios están conscientes de su capacidad limitada para monitorear eficazmente e imponer el cumplimiento de políticas. Como resultado, los

ministerios que actualmente negocian con FENCOMIN son cautelosos, aun si no llegan a ceder a la larga lista de demandas de FENCOMIN.

Observamos cómo FENCOMIN actuó crecientemente como un negociador firme, confiado e intrépido, por cuanto recurría a una historia de haber sido un retador formidable de varios gobiernos, en tanto es consciente de las “obligaciones” del actual gobierno para con los pobres y anteriormente excluidos de Bolivia que FENCOMIN pretende incorporar, y en tanto puede acceder a una firme cultura organizacional, capacidad tradicional de fuerte movilización, y líderes bien preparados y entrenados para la confrontación. Sus procesos estratégicos autónomos son más importantes que aquellos inducidos; se trata de un jugador pro-activo en las actuales relaciones de poder. Eso les da también el poder de ocultar las tácticas y prácticas fuera del escenario.

Sin embargo, vimos también que algunas cooperativas, al carecer de esa historia y tales memorias, al ser más heterogéneas en su estructura organizativa, y al estar conscientes de esas debilidades y de “tener algo que perder”, asumen una posición más cautelosa en sus interacciones con las autoridades (locales y regionales). Muchos de sus procesos estratégicos son inducidos y menos proactivos o asertivos.

En nuestros esfuerzos por analizar los encuentros, intercambios, negociaciones entre, por un lado, las fuerzas que tratan de regular, reprimir, monitorear o gobernar y, por el otro, las fuerzas que luchan por obtener mayores utilidades, libertad máxima, oportunidades y tranquilidad para poder trabajar, no deberíamos ver únicamente a las actuales reuniones, legislación, propuestas y contrapropuestas. No deberíamos evaluar las cosas como si solo fueran producidas por el desnudo juego de poder, los cálculos, u opciones racionales. Deberíamos también ver los contextos, las historias, las imágenes, las memorias, las evaluaciones subjetivas de las propias fortalezas y debilidades, y las de la otra parte. Las maneras en que los conflictos, o esfuerzos de entendimiento mutuo, adquieren forma, están determinadas por algo más que la colisión de intereses a secas.

Los autores agradecen a Celine Duijves, Marjo de Theije, Gerardo Damonte y los otros miembros del consorcio GOMIAM por sus valiosos comentarios a versiones preliminares de este artículo.

Notas

[1] Ver por ejemplo el periódico colombiano *El Espectador*, “Fiebre del oro pone en jaque a América Latina” de 11 de mayo 2012, en <http://www.elespectador.com/economia/articulo-345580-fiebre-del-oro-pone-jaqueamerica-latina> y www.gomiam.nl

[2] Según “Noticias Bolivianas” en EABolivia.com, Bolivia contaba con 1200 cooperativas en 2012 ver <http://www.eabolivia.com/economia/10148-cooperativas-mineras-de-bolivia-ya-suman-1200-gracias-a-los-altos-precios.html>; ver también <http://boliviaminera.blogspot.com/2012/03/cooperativas-mineras-viven-el-auge-del.html>: *Minería de Bolivia* de domingo, 18 de marzo de 2012 (“Cooperativas mineras viven el auge del sector y prevén un buen año”), y Carrillo 2012 (3) contabilizó incluso 1300, mientras que en 2010 habían solo 635. El número de cooperativas mineras prácticamente se duplicó.

[3] Ver PIEB.com.bo (Periodico digital de investigación sobre Bolivia) de 19-4-2013, “CEDIB asegura que nueva Ley General de Cooperativas posibilita a mineros asociarse con trasnacionales”, en http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=7992

[4] Ver el sitio de COMIBOL de 8-12-2011, “Cooperativas exigen modificación de concesiones mineras”, en http://www.comibol.gob.bo/noticia_prensa/1002-cooperativas_exigen_modificacion_de_concesiones_mineras

[5] Periódico *El Diario* de 18-9-2012, “Medmin: El Estado controla sólo el 5% de la producción aurífera”, ver

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_09/nt120918/economia.php?n=18&-medmin-el-estado-controla-solo-el-5-de-la-produccion-aurifera).

[6] Ver el sitio del Centro de Documentación e Información Bolivia, en <http://www.cedib.org/tag/mineria/>., y hasta parlamentarios oficialistas expresan sus dudas: <http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4/13569>, página del Observatorio de Conflictos Mineros de 26-6-2013.

[7] Ver un “dossier” especial sobre el tema en el diario *La Razón*, suplemento “Animal Político”, del 1-7-2012, en <http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com>. En el artículo Rolando Jordán, analista minero, declara: “Ellos son una plaga, lo peor que le pudo haber pasado al país, pero tienen poder político. Ellos son depredadores de la naturaleza y los hombres, primero porque explotan irracionalmente y selectivamente de los lugares más ricos, y segundo porque la forma en que explotan al trabajador es brutal, ellos no cumplen ni siquiera con lo mínimo de la Ley del Trabajo”.

[8] Ver por ejemplo las declaraciones de septiembre 5, 2012 en *La Razón* de 5-9-2012 (“Cooperativistas mineros están en emergencia y exigen resolver lío con Colquiri”), en http://www.la-razon.com/economia/Cooperativistas-mineros-emergencia-resolver-Colquiri_0_1682231818.html.

[9] La técnica de recuperación de oro es con pontones en el río. Hay como 300 pontones trabajando bajo el paraguas de ASOBAL. Todos los pontones tienen un equipo de bombeo, un sistema de ductos o mangueras de succión y una canaleta. A través de las mangueras el material, los sedimentos del lecho del río que contienen oro, es absorbido y dirigido a la canaleta. Estos canales de drenaje son de casi 4 metros de ancho, cubiertos con una alfombra ensortijada conocida localmente como “cabello de negro”, en la cual se recoge los elementos más pesados del material. Una sesión de trabajo dura cerca de 20 horas. Luego las bombas son apagadas y las alfombras son lavadas para obtener el concentrado, básicamente “arenas negras” y oro. Este se coloca en una bañera o recipiente, en el que se lo amalgama con aproximadamente 600 gramos de mercurio.

Para hacer esto, los mineros simplemente pisotean la mezcla con sus pies desnudos, y a veces utilizan equipo de taladro (con paletas batidoras). Posteriormente, las “arenas negras” son separadas de la amalgama, y esta última es llevada a un destilador o retorta para separar el mercurio del oro.

Referencias citadas

Assies, Willen y Ton Salman (2004). *The Bolivian Crisis-The Elections of 2002 and their Aftermath*. University of London: Institute of Latin American Studies (ILAS).

Burgelman, Robert (1991). “Intraorganizational Ecology of Strategy Making and Organizational Adaptation: Theory and Field Research”, *Organization Science* No. 2, pp. 239-262.

Damonte, Gerardo (2008). *The Constitution of Political Identities in the Andes: Mining, Rural Communities, Social Movements and Protests in Bolivia and Peru*. Saarbrücken: VDM Verlag.

Espinoza, Jorge (2010). *La Minería en Bolivia, Su Realidad*. La Paz: Plural.

Lewin, Arie y Henk Volberda (1999). “Prolegomena on Coevolution: A Framework for Research on Strategy and New Organizational Forms”. *Organization Science*, No. 10, Vol.5, pp. 519-534.

McCarthy, Johny y Mayer Zald (1977). “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”. *American Journal of Sociology*, No. 82, Vol. 6, pp. 1212-1233.

Michard, Jocelyn (2008). *Cooperativas mineras en Bolivia-Formas de organización, producción y comercialización*. Cochabamba: Centro de Documentación e Información Bolivia-CEDIB.

Ministerio de Minería y Medio Ambiente (2010). *Anuario Estadístico Minero Metalúrgico*. Bolivia: La Paz.

Ministerio de Planificación del Desarrollo (2006), Plan Nacional de Desarrollo.

Mogrovejo, Rodrigo y Philippe Vanhuynegem (2012). *Visión panorámica del sector cooperativo en Bolivia*. La Paz: OIT.

Pellegrini, Lorenzo (2012). “Planning and Natural Resources in Bolivia-Between Rules without Participation and Participation without Rules”. *Journal of Developing Societies*, No. 28, Vol.2, pp.185-202.

Radhuber, Isabella (2012). “La lucha por la nacionalización. Reflexiones preliminares acerca de la minería en Huanuni”. Disponible en http://proyecto-nebe.org/upload/books/40/Huanuni_Reflexiones_preliminares_IMR_para_HP_original.pdf (visitada el 16 de febrero de 2012).

Roca, Roberto (2013). “The Role of Mining Cooperatives in Bolivia’s Recent Mining Conflicts”. *Canadian Student Review*, No. 19. Disponible en <http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/articles/role-of-mining-cooperatives-in-bolivias-recent-mining-conflicts-CSRwinter2013.pdf> (visitada el 16 de febrero de 2012).

Rubin, Jeffrey (2004). “Meanings and Mobilizations: A Cultural Politics Approach to Social Movements and States”. *Latin American Research Review*, No. 39, Vol.3, pp. 106-142.

Salman, Ton (2011). “Entre protestar y gobernar: movimientos sociales entre ideales y responsabilidades; el caso boliviano”. *T’inkazos-Revista boliviana de ciencias sociales*, No. 29, pp. 21-43.

Tejada Soruco, Alicia (2012). *Minería en las tierras bajas de Bolivia*. La Paz: CEDIB.

Webber, Jeffery (2011). *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales*. Chicago: Haymarket Books.

Williamson, Oliver (1995). Transaction cost economics and organization theory. En *Organization Theory-From Chester Barnard to the Present and Beyond*, pp. 207-255, Oliver Williamson (editor). New York: Oxford University Press.